

Venezuela: La modernidad encenagada

Raúl González Fabre, SJ

Tres escenas llamativas

Primera escena (<http://www.youtube.com/watch?v=K8kIP5BsSPg>)

Domingo 7 de febrero de 2010. El Presidente pasea en traje militar de faena entre árboles y edificios bajos, estilo años '60: Es la plaza Bolívar, en el centro histórico de Caracas. Junto al Presidente, un pequeño grupo de seguidores en camisa roja, el uniforme del partido, entre ellos Jorge Rodríguez, alcalde del Distrito Libertador en el cual está situada la plaza.

El Presidente le pregunta: –¿Ese edificio ahí, qué es? ¿Ese es un teatro antiguo, no era? Ajá, ¿pero eso está en manos del gobierno, verdad?

Sigue preguntando: –¿Y este edificio?. Le responde el alcalde: –Ese es un edificio que tiene comercios privados de joyería. –Exprópiese, exprópiese. –De acuerdo.

Vuelve el Presidente al alcalde: –¿Y aquel edificio allá en la esquina? –Aquel es un edificio que tiene locales comerciales.–Bueno. Mire, me decía Jacqueline ahora que en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están es unos negocios. Exprópiese. –Ahora mismo.

Por tercera vez, el Presidente: –¿Y este edificio de aquí cuál es? –También es un edificio que tiene locales comerciales. –Exprópiese, señor alcalde, exprópiese, exprópiese.

La concurrencia aplaude, no sin cierto asombro.

Cuatro horas después las órdenes de expropiación han sido firmadas por el alcalde, y el lunes por la mañana los guardias nacionales expulsan a los comerciantes y empleados de los edificios donde habían trabajado por décadas.

Segunda escena (<http://www.youtube.com/watch?v=Eyte60T4bRc>)

Lunes 5 de julio de 2010, celebración de la Declaración de Independencia en la Asamblea Nacional venezolana. El Presidente, en traje formal y revestido con la banda con los colores nacionales que se acostumbra en las grandes ocasiones, se dirige a la Asamblea desde su puesto en la mesa de presidencia de la cámara.

En vez de leer un discurso escrito, el Presidente habla en tono coloquial, como en su programa dominical de televisión. Acusa al cardenal Urosa, arzobispo de Caracas, de haber salido como un troglodita, mandado por la oposición y los pitiyanguis, a asustar al pueblo diciendo que el país va a una dictadura comunista y mintiendo sobre la Cuba socialista hermana.

El Presidente interpela al nuncio de Su Santidad, que está allí en función de decano del cuerpo diplomático. Le dice que Venezuela no se merece ese cardenal. El pueblo venezolano merece otro cardenal, jerarcas de la Iglesia que le respeten, porque es un pueblo cristiano.

La mayor parte de la Asamblea y de los invitados, incluido un sacerdote, aplauden de pie. El Presidente hace una pausa hasta que los aplausos cesan. Sigue sobre el cardenal: es un sujeto indigno, un golpista a cuyo nombramiento el Presidente se opuso en su momento.

El Presidente tiene su candidato a la púrpura: Mario Moronta, arzobispo de San Cristóbal, quien debería ser supercardenal venezolano. Para el Presidente y para el pueblo, Moronta es el cardenal. El Presidente sabe bien, porque fue monaguillo, y su madre quería que fuera cura.

El Presidente encarga al Nuncio que comunique al Papa que mientras haya esos obispos en Venezuela, andará bien alejado de la jerarquía católica: andará con los curas de los barrios y los campos, con los padres verdaderos. Esa batalla no ha terminado: él se siente reivindicado por la verdadera doctrina social de la Iglesia: el camino de la justicia, que, según Teilhard, socialismo y cristianismo pueden hacer juntos en la historia.

Tercera escena (<http://www.youtube.com/watch?v=DEnihniqTlc>)

Viernes 16 de julio de 2010. El Presidente, de traje negro y camisa roja sin corbata, habla a la nación desde el Palacio de Miraflores. A un lado la bandera, y a su espalda un retrato de cuerpo de entero de Simón Bolívar, el Libertador.

El tono de la alocución es íntimo. El Presidente comparte sus emociones sobre el proceso de exhumación de los restos de Bolívar, que ha presenciado la madrugada anterior.

El propósito principal de la exhumación es realizar una nueva autopsia para verificar la causa de la muerte del Libertador. El Presidente duda de la autopsia realizada por el doctor Próspero Révérend, francés médico de cabecera de Bolívar y cirujano jefe del ejército republicano, el mismo día 17 de diciembre de 1830 en que falleció Bolívar. Sospecha que pudo haber sido

envenenado por sus enemigos colombianos, en vez de por causa de la tuberculosis que su médico llevaba meses tratando.

El Presidente va y viene de los procedimientos científicos a sus sentimientos personales, y de allí a la diatriba contra sus enemigos y a la identificación entre su proyecto político, el pueblo y la patria. A la vista del cadáver, al Presidente le han brotado las lágrimas. Le ha preguntado en oración si es él en verdad, porque como Jesucristo, Bolívar ha trascendido la muerte. No está muerto sino vivo en 'nosotros'. Cita a Neruda: Bolívar despierta cada cien años cuando despierta el pueblo.

Quienes critican al Presidente son enfermos que le acusan de estar haciendo brujería con los restos de Bolívar, apátridas que colocaron sobre el cuerpo de Bolívar una bandera "made in England", la cual va a ser reemplazada por una cosida por mujeres venezolanas. No tienen alma, o la tienen podrida. Sólo puede pedirse a Dios que les perdone, porque no saben lo que hacen ni lo que dicen, a diferencia de 'nosotros', su llamarada, sus hijos e hijas, encarnación del espíritu de la nación.

No está mal: tres escenas como estas en seis meses, más otras muchas semejantes que no trascendieron a la prensa internacional por referirse a asuntos más locales o menos espectaculares. Y así, a lo largo de casi doce años, porque la permanencia en el poder no ha cambiado el estilo del Presidente Chávez.

Tales escenas serían difíciles de imaginar en casi cualquier país contemporáneo de mediano grado de modernización, incluyendo la mayor parte de los latinoamericanos. Sugieren más bien un despotismo de los que aparecen de tiempo en tiempo en África. Hay muchos gobiernos autoritarios en el mundo, pero pocos desprecian las formas legales con tanta ostentación como el de Venezuela.

Sin embargo, Venezuela dista de ser una sociedad primitiva sin contacto previo de provecho con la modernidad. Muy al revés, hacia 1980 podía ser considerada sin temor a equivocarse como uno de los países de América Latina que mejor había entrado en la modernidad política y social, y que más partido había sabido sacar de ella. Esa misma sociedad es la que lleva una década larga sosteniendo en el poder, dubitativamente, es verdad, a Hugo Chávez. En este breve ensayo pretendemos mostrar cómo puede ser esto, qué razones históricas y culturales hacen de Chávez una posibilidad histórica viable en el contexto del proceso de la modernización de Venezuela.

La república modernizadora

Venezuela nació como república en 1830 con una finalidad eminentemente modernizadora. No se trataba sólo de desembarazarse de los funcionarios peninsulares que en nombre del rey dificultaban el comercio, sino, al mismo tiempo, también de construir un país moderno según los cánones de las Ilustraciones francesa y británica, y el ejemplo de los Estados Unidos.

La modernización suele evaluarse por distintos indicadores interrelacionados. Algunos son puramente económicos, como el crecimiento del producto interno y el empleo formal; otros sociales, como los de alimentación, educación y salud que recoge el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas; y otros, en fin, políticos, relacionados con la calidad de las instituciones: imperio de la ley, separación de poderes, gobierno representativo, libertades públicas, grados razonables de descentralización y participación, control de la corrupción y la violencia...

La relación entre estos tres tipos de factores es asunto discutido. Hay quienes piensan que la modernidad política requiere primero de cierta modernización social (la constitución de una mayoría de clase media), y que ésta a su vez necesita de un producto interno suficientemente acrecido, el cual vendría a ser la locomotora del proceso modernizador. Estos tienden a ver con buenos ojos al 'déspota ilustrado' tipo Pinochet, que restringe las libertades públicas para imponer políticas económicas que promueven el crecimiento, y luego deja paso a gobiernos democráticos con mayor preocupación social.

Otros, por el contrario, consideran que la buena gobernanza institucional es la clave tanto del crecimiento económico como de la modernización social, porque sólo con ella pueden vencerse los obstáculos creados por las oligarquías establecidas tanto a la reconversión productiva como al mejor reparto del producto. Esta opinión fue quizás predominante durante la ola democratizadora de los años '90, con las fuertes presiones de la época para establecer democracias liberales sobre cualquier fundamento social y económico nacional.

Sin embargo, el caso venezolano no es el de un país que se encuentre puertas afuera de la modernidad y deba decidir el orden de los factores para entrar en ella, habiendo quizás escogido un déspota modernizador. La Venezuela de los años '90 había hecho ya mucho camino en la modernización, pero aún así eligió un Presidente al que 'déspota' conviene sin duda mejor que 'modernizador'. Para entender por qué, ha de volverse la mirada a la historia de la modernización venezolana.

Dos sociedades, dos culturas públicas

Desde su independencia de la Gran Colombia, Venezuela hizo honor a su vocación modernizadora estableciendo en la constitución todos los elementos de una institucionalidad moderna, según alguno de los modelos comunes en la época. El punto de partida social no era propicio, ni tampoco lo era el económico. Se trataba de un país fundamentalmente rural, con una mayoría negra, india y parda que no había conocido la escuela, afectada por enfermedades endémicas, que malvivía de la explotación extensiva de la tierra. El Estado nacional, financiado por unas pobres aduanas, apenas alcanzaba a hacer presencia institucional en parte del territorio. Las fuerzas locales y regionales de poder predominaban sobre él con facilidad.

Mirando con detalle el funcionamiento de la vida pública venezolana, se advierte desde el comienzo una brecha en la constitución social del país, entre la mayoría rural desposeída y las élites urbanas que controlaban la pobre economía y el precario aparato estatal. Y, junto con ella, también una brecha en la cultura pública, entre el discurso oficial sobre las reglas del juego civil, por una parte, y los mecanismos de distribución real del poder en la sociedad, por la otra.

El discurso oficial, expresado no sólo en el debate político sino también en la prensa y la escuela, era institucionalista. Según él, la ley republicana ha instaurado la igualdad formal entre todos los ciudadanos, de manera que cada cual sea tratado según la norma abstracta contenida en esa ley. Las diferencias dentro de la ley deben ser aplicadas por igual para todos. El diseño constitucional y legal del Estado, con frecuencia adaptado de otras latitudes, presuponía una ley operante bajo esos criterios.

Sin embargo, el poder y la riqueza reales se jugaban en otro terreno que rara vez alcanzaba el discurso público, como no fuera para acusar al adversario. Se trata del terreno de las relaciones cortas, las conexiones entre individuos y familias, las dependencias clientelares entre el político y los miembros de sus grupos sociales de soporte, los vínculos personales preexistentes o establecidos en el momento. Allí se hacen los arreglos que en verdad determinan el funcionamiento de la economía y de la república, en la escala micro del otorgamiento de una concesión, un contrato o una sentencia, y a menudo también en la escala macro de la definición de leyes y políticas.

La operación del Estado venezolano por relaciones cortas entre personas y grupos sociales que se reconocen entre sí, no constituye una excepción más o menos inevitable a la norma legal, sino que cobra prioridad sistemática sobre ella. Cada vez que el contacto personal o la relación clientelar se hace presente, la ley se ignora o se tuerce, y se establecen nuevas prioridades de

decisión pública. Cada vez que alguien necesita que una instancia del Estado actúe a su favor, no se pregunta “qué ley me ampara” sino “a quién conozco yo ahí”. Cada cual es tratado según sus conexiones, con lo que ni la justicia es posible ni la democracia puede ser efectiva.

Ello no sólo deslegitima a un Estado que se proclama moderno, sino que también lo hace inoperativo. Si el Estado está diseñado suponiendo un cierto comportamiento según la ley de sus gobernantes, funcionarios y ciudadanos, y la mayor parte de éstos actúan regularmente de manera muy distinta, el resultado no puede ser más que disfuncional: el Estado será colonizado por clanes formados en torno a vínculos personales (familia, paisanaje, clientela política, negocios comunes...), y sus políticas fracasarán en los objetivos modernizadores que enuncian porque estarán sirviendo a otros objetivos particulares encubiertos.

Petróleo y populismo

El siglo XIX dejó afincadas en Venezuela las dos brechas interrelacionadas que hemos mencionado: entre las mayorías pobres y las minorías de mejor pasar, por una parte; y entre las declaraciones institucionales de modernidad y la realidad de una vida pública gobernada por relaciones cortas. Ambas estructuras impidieron eficazmente el progreso del país en la modernización. En el siglo XX, dos hechos vinieron a modificar el cuadro.

En primer lugar, a partir de la década de 1920, el petróleo apareció como un factor decisivo en la economía venezolana. La riqueza del subsuelo pertenece por ley al Estado venezolano, de manera que éste se encontró de pronto con un flujo de recursos exógenos cuantioso y por mucho tiempo creciente. Como consecuencia, de considerarse mero promotor de una modernización que ocurriría por las fuerzas del libre mercado en el proyecto decimonónico, el Estado pasó a pensarse a sí mismo como motor y protagonista de ese proceso, a través de la inversión de la renta petrolera.

En las primeras décadas del siglo XX, el Estado venezolano empleó el ingreso del petróleo en extender su poder a todo el territorio, unificándolo por fin, y emprender la modernización económica de país a través de la erradicación de las endemias, la construcción de infraestructura, y el subsidio a la industrialización privada.

Aunque el progreso fue generalizado, la distribución de la renta petrolera seguía los canales de las redes de conexiones clientelares de quienes detentaban el poder. La vinculación a esas redes fue determinante en la aparición de grandes fortunas, y, en otro nivel de aprovechamiento, también

en la formación de una clase media profesional y empresarial que encontraba numerosos modos de beneficiarse del festín petrolero. La mayoría pobre y rural del país vio, sin embargo, pocos beneficios de la nueva situación, porque el Estado venezolano en realidad no había sido pensado para ocuparse de ellos. La historia hasta mediados del siglo XX fue de distribución más bien restringida y según los modos heredados, de la nueva y creciente renta petrolera.

Pero la modernización económica iba generando aspiraciones de movilidad social, e incluso sus primeras realizaciones en términos de industrialización y migración del campo a la ciudad. Aparecieron entonces partidos con la pretensión de acelerar también la modernización política y social, extendiéndola a las mayorías populares con los recursos públicos provistos por el petróleo. Esos partidos resultaron clasificables en dos grupos: populistas y marxistas.

Los partidos populistas pretendían ejercer la representación del pueblo frente a las élites en un pacto social para limitar la lucha de clases, y evitar tanto la dictadura reaccionaria como la revolución socialista. Respecto al modelo económico, se decantaron por un capitalismo fomentado con la renta petrolera y fuertemente intervenido por el Estado.

Los partidos marxistas, por su parte, planteaban restringir o eliminar la propiedad privada de los medios de producción como término de un proceso revolucionario resultado de la lucha de clases y la agudización de las contradicciones internas, tanto las remanentes de la Venezuela semi-feudal como las generadas por los nuevos procesos de modernización.

Los partidos marxistas nunca se acercaron al poder, pese a intentarlo por vía electoral y por vía armada, pero los dos grandes partidos populistas --Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y Copei, demócrata-cristiano-- gobernaron de 1945 a 1948, y de 1958 en adelante, reuniendo entre ambos porcentajes superiores al 80% de los votos en elecciones muy concurrenciadas.

Acción Democrática y Copei eran partidos de masas, de implantación nacional y estructuración centralista, aptos para gobernar un Estado nacional de grandes recursos en comparación con la sociedad civil. Aunque tuvieron dirigentes con gran carisma y presencia pública, como Carlos Andrés Pérez (AD) y Rafael Caldera (Copei), en principio funcionaban como verdaderos partidos modernos con un considerable grado de democracia interna. Con ellos, la política venezolana había pasado de ser asunto de clientelas personales a moverse por partidos razonablemente institucionalizados; sin duda un progreso en la modernización política.

Congruentes con sus programas, los partidos populistas en el poder abrieron líneas masivas de gasto social en educación, salud, vivienda y alimentación, con la finalidad de modernizar a la población rural pobre, todavía mayoritaria. Por primera vez en la historia del país, el Estado se rediseñaba para incluir a los pobres en el propósito nacional de modernización. La población acogió el proyecto con entusiasmo, deseando incorporarse a él cuanto antes. Ello explica cómo, pese a la persistencia de las desigualdades, los partidos marxistas nunca tuvieron gran predicamento.

La estrategia de modernización de los pobres incluía su urbanización para facilitar la provisión de servicios básicos, su encuadramiento político en los partidos populistas como canales de acceso a la ciudadanía democrática, y su participación en la economía industrial moderna que se intentaba fomentar con políticas de protección de los productores nacionales, sustitución de importaciones, y semejantes.

La presencia del ingreso petrolero en manos del Estado garantizaba a éste el control del proceso de modernización, y le proporcionaba un excedente exógeno con el que atenuar los conflictos sociales emergentes: todos podían ganar a la vez sobre su situación anterior, gracias al petróleo. En vez del conflicto de clases propugnado por los partidos marxistas, el populismo ofrecía una conciliación fructuosa de los intereses de los diversos grupos sociales.

Las perspectivas eran muy prometedoras y, en efecto, durante veinte años, desde 1958 a 1978, el país pareció progresar sostenidamente en democracia. El sistema político cumplía su promesa con los pobres: los llevaba a la ciudad, les ofrecía participación política, los educaba y vacunaba; y podían aspirar a un empleo en la economía moderna, o bien a vivir en los márgenes informales de ésta mejor que antes. Si la promesa no se completaba para la primera generación de venezolanos pobres venidos del campo, había una perspectiva plausible de que se cumpliría completa para la siguiente generación. El país se desarrollaba, qué duda cabe.

Crisis

Sin embargo, tras esos veinte años de aparente éxito, el sistema populista de partidos entró en una larga crisis estructural, que comenzó en 1979 cuando las rentas reales del trabajo asalariado empezaron a caer en medio de una bonanza petrolera, siguió con la crisis de la deuda externa (1983), se acentuó con el colapso de los precios internacionales del petróleo (1986-2000), conoció una rebelión popular (1989) y dos intentos de golpe de Estado militar (1992), y culminó con la victoria electoral en 1998 de Hugo Chávez, líder del primero de

los golpes de 1992, con un programa de ruptura constitucional apoyado por partidos marxistas y populistas de izquierda.

En ese proceso de veinte años, el régimen populista se reveló cada vez más desnudo ante una población que, ahora urbana, seguía siendo pobre en un 60%. No se había consolidado un sector privado suficientemente competitivo para sostener al país ante la caída de los precios del petróleo, ni se había generado una clase media tan grande como para dar estabilidad al sistema político.

La causa de este fracaso probablemente sea la misma que acompaña a la vida pública venezolana desde el siglo XIX. Los avances iniciales en institucionalización que la democracia de partidos supuso, fueron en pocos años contrarrestados por la colonización de esa institucionalidad por redes de relaciones personales y clientelares. Los partidos populistas vincularon políticamente al resto de la población con distribuciones de renta petrolera que, realizándose aparentemente a través de políticas públicas modernizadoras, en realidad seguían la topología de esas redes.

Ello disminuyó enormemente la eficacia del Estado populista como agente modernizador (sus programas obtenían escasos resultados con altos costes), y erosionó su legitimidad política ante la población (que percibía como falsas sus promesas de democracia efectiva y justicia social). Si la distribución de los recursos públicos se hace a través de redes de influencias basadas en relaciones cortas, los mejor situados y los más influyentes recibirán la parte del león. Y cuando las tornas se vuelven (el ingreso petrolero no sólo es cuantioso sino también volátil), serán los sacrificios y no la renta lo que se reparta desigualmente. Así ocurrió, en efecto, hasta extremos escandalosos que, en una sociedad con libertad de prensa, no pudieron ser ocultados.

El relativo fracaso en la modernización populista, enfocada programáticamente hacia las mayorías populares, se vio propiciado por el espejismo petrolero. La presencia de una cuantiosa renta exógena, a la que se accede por mera extracción de recursos naturales, puede confundir respecto a la capacidad productiva de la sociedad y de los sectores más pobres en ella. La distribución de renta hace posible consumir sin producir competitivamente. La producción ya la ha hecho la naturaleza; se trata sólo de monetizarla y utilizarla.

Aunque el programa político populista conceptualizaba el uso de la renta petrolera como inversión económica, social y política, a la hora de la verdad distribuir la renta petrolera directamente para el consumo resultó una tentación invencible. Particularmente invencible porque el régimen político era una democracia clientelar, de manera que la victoria electoral dependía de suscitar y satisfacer aspiraciones populares de participación en la renta

petrolera. Y no sólo en la renta presente, sino también en la futura: los periodos de mayor ingreso petrolero fueron los de mayor endeudamiento exterior.

Manteniendo una moneda sobrevaluada que hacía baratas las importaciones, subsidiando directamente muchos bienes básicos, sosteniendo una plantilla de funcionarios públicos muy por encima de las necesidades operativas del Estado, aceptando altos sobrepuestos en las compras e inversiones estatales, sosteniendo empresas públicas altamente deficitarias, otorgando subvenciones masivas al sector privado, y por otros mecanismos semejantes, la renta petrolera se hizo llegar (muy desigualmente) a la población, sin que ello redundara en un incremento proporcionado de la capacidad productiva del país. Así, buena parte del sector privado terminó derivando sus beneficios de la captación directa o indirecta de recursos petroleros, no de su competitividad en los mercados. Tan pronto como el ingreso petrolero ya no bastó para sostener ese gasto y el servicio de la deuda, el país se vio incapaz de complementar el petróleo con otras exportaciones.

Cada bajada del precio del petróleo en las dos décadas siguientes supuso un golpe severo a la capacidad de consumo de los pobres. Muchos pobres habían mejorado su situación en materia de ingreso y acceso al consumo, pero no realmente su capacidad para derivar ese nivel de ingreso y consumo de su contribución productiva en una economía de mercado. Cuando, en 1989, Carlos Andrés Pérez intentó un programa de reorientación de la economía hacia los mercados, las mayorías populares sintieron que el Estado, en el que habían confiado para salir adelante, les abandonaba en un terreno salvaje para el cual no estaban preparados. La modernización ocurrida en los veinte años anteriores se reveló en buena medida insostenible, incapaz de reproducirse a sí misma, ficticia en último término.

Ello no ocurrió para toda la población por igual, sin embargo. Muchos sectores profesionales y obreros se habían modernizado efectivamente, y encontraron en el mercado nuevas oportunidades. Otros, los más cercanos al poder, siguieron recibiendo porciones más que satisfactorias de la renta petrolera, de manera que convirtieron la crisis económica en otra ocasión para medrar. La mayoría de la población, sin embargo, se sintió traicionada y empezó a desarrollar un resentimiento cada vez más profundo hacia el sistema populista de partidos, sus representantes políticos, y los grupos sociales que, por una vía o por otra, seguían a flote mientras ellos se hundían.

Ese resentimiento resultó difícil de procesar dentro del régimen. Habiendo contado por décadas con una renta petrolera creciente para evitar el conflicto

social, no se desarrollaron mecanismos democráticos ni hábitos sociales de negociación de la escasez. La modernización populista había fracasado.

El fin del sistema

Dice mucho del enraizamiento del proyecto populista el que transcurrieran veinte años, de 1979 a 1999, entre el momento en que las mayorías populares empezaron a ver caer su nivel de vida hasta el momento en que llegó al poder un candidato que proponía abiertamente la ruptura con el régimen nacido de ese proyecto. Puede decirse que esos veinte años fueron una prórroga que el pueblo concedió al régimen para que se reformara y volviera a su propósito original.

En ese tiempo se pusieron de manifiesto tres aspectos importantes para entender la realidad venezolana de hoy: (i) La existencia de una minoría profesional realmente moderna, que intentó por todos los medios a su alcance reformar el Estado, fortalecer la sociedad civil y cambiar las bases de la economía de la dependencia petrolera a la producción para competir de manera efectiva en los mercados. (ii) Las grandes dificultades de las mayorías populares para comprender e incorporarse a esos nuevos proyectos modernizadores, y su fijación en la idea general de que la modernización se debía hacer por la vía de la inversión y distribución para consumo de la renta petrolera. (iii) La persistencia en los sectores más cercanos al poder político de unas redes de relaciones personales y clientelares capaces de hacer fracasar los nuevos proyectos modernizadores, todos los cuales se estrellaron contra la falta de voluntad política de los mejor situados en el sistema que se desplomaba.

Desde 1984 a 1998 se hicieron tres grandes intentos para reconducir el sistema: la Comisión para la Reforma del Estado en la presidencia de Jaime Lusinchi, bloqueada por el mismo presidente; el programa liberal de Carlos Andrés Pérez, rechazado masivamente por la población y por el propio partido del Pérez; y las reformas de corte nacionalista popular de Rafael Caldera, que fracasaron por la falta de cooperación de los grandes partidos y los grupos empresariales. El tiempo de prórroga se acabó, y el régimen populista no logró reconvertirse conservando su legitimidad política.

En 1998, más de la mitad de los votantes eligió al golpista Hugo Chávez como presidente de la república. Los perdedores de los veinte años anteriores votaron con ira y resentimiento, aplaudiendo el posterior proceso de desmantelamiento de la constitución que Chávez ejecutó con presteza.

Chavismo, nuevo populismo y socialismo

Chávez llegó al poder sin el respaldo de ninguna maquinaria partidista parecida en su alcance e implantación a los grandes partidos populistas. La mayor parte de las organizaciones políticas que lo apoyaron eran partidos socialistas que habían perdido la batalla por la hegemonía política décadas atrás. No fue su esfuerzo combinado lo que llevó a Chávez a la presidencia, sino la capacidad del candidato de comunicar directa y personalmente con las mayorías: Supo establecer, para entre el 50 y el 60% de los venezolanos, principalmente de los grupos sociales populares y marginales, una nueva representación política sobre las ruinas de la anterior.

En esa representación política, el componente emocional ha sido siempre más importante que el ideológico. Sobre ella, Chávez promueve un proyecto político con tres tipos de elementos: (i) algunos ya presentes en el régimen anterior; (ii) otros en que Chávez se diferenció desde el principio de ese régimen, siguiendo el sentir popular; y, por último, (iii) otros más problemáticos, que el presidente va desvelando e intentando introducir en una población que no se identificaba inicialmente con ellos. Veámoslos en ese orden.

Lo que queda del populismo democrático

Del régimen anterior, Chávez ha debido asumir, de mejor o peor grado, algunas convicciones populares que conservan una solidez considerable. Entre las que juegan en su contra, las más importantes se refieren a la modernidad política: la mayoría de la población rechaza la dictadura y la represión política, y aprecia el mecanismo electoral, la existencia de poderes regionales y locales de elección directa, las libertades de expresión, asociación y manifestación, y semejantes. Chávez ha ido erosionando severamente todos esos elementos a lo largo de los últimos doce años, pero no ha conseguido suprimirlos. Sí ha conseguido, sin embargo, evitar que desde los mecanismos democráticos pueda limitarse con efectividad su ejercicio del poder, o desafiarse su permanencia en él.

Chávez ha asumido también las convicciones populistas referidas a la distribución de la renta petrolera como mecanismo de modernización social y de acceso al consumo. Para mejorar la efectividad de esa distribución en programas alimentarios, educativos y de salud, ha utilizado una vía heterodoxa: en vez de reformar las voluminosas instituciones del Estado venezolano, ha creado organizaciones paralelas (las misiones sanitarias y educativas, PDVAL, la Universidad Bolivariana) con fuerte intervención de sus partidarios, de militares y de personal cubano. Con ello, ha eludido el problema de la reforma del Estado contra el que se estrellaron sus

predecesores, al coste de pagar cada servicio dos veces. Este dispendio de recursos está siendo posible porque los precios internacionales del petróleo han vuelto a subir, desde USD 20/barril en 1999 hasta USD 100/barril en 2008 (en dólares constantes de 2008). Como resultado de la nueva distribución petrolera, la pobreza medida por el acceso al consumo ha disminuido. La pobreza entendida como carencia en la capacidad productiva permanece, sin embargo, intacta.

Desde el punto de vista económico, Chávez ha asumido dos elementos que estaban en el proyecto político populista desde el principio (y que contribuyeron muy efectivamente a su fracaso): El protagonismo del Estado en la producción a través de empresas públicas, y la creación de una clase empresarial leal al régimen cuyo negocio consiste en beneficiarse de contratos públicos y mecanismos creados a su medida por el Estado. En ambos casos, se trata de desplazar a las antiguas clases empresariales que se le oponen.

Militarismo y anti-institucionalismo

Hay también aspectos en que, desde el principio, Chávez se diferenció de la representación política anterior. La diferenciación le era imprescindible para no aparecer como uno más de los reformadores fallidos del pasado inmediato, y responder de manera convincente al diagnóstico popular de la crisis venezolana. Ese diagnóstico puede resumirse en dos frases: Venezuela es un país rico en virtud de sus recursos naturales, de manera que distribuyéndolos adecuadamente alcanza para que todos puedan progresar rápidamente. Si yo y los míos no estamos progresando como esperábamos, sino al contrario, retrocedemos, ello ha de ser porque otros (los corruptos, en sentido amplio) están llevándose mi parte.

Compartiendo esta idea, Chávez se propuso a sí mismo como el hombre fuerte, el militar campeón del pueblo que va a luchar contra los corruptos para volver a un reparto justo de la riqueza petrolera. En vez del lenguaje de conciliación social propio del populismo anterior, empleó desde la primera campaña electoral uno muy violento de confrontación, con tintes mesiánicos. Como los corruptos son, en primer lugar, los partidos políticos, en los que la gente ya no cree, él no depende de ningún partido sino que crea un 'movimiento' en torno a su persona, dedicado a proyectar su carisma personal y sus decisiones a todo el país.

Chávez acentúa el lenguaje de confrontación social para incluir en él no sólo a las clases políticas del régimen anterior, sino también a los estamentos empresariales, sindicales, profesionales y eclesiales. Ellos son 'los ricos', los que siguieron progresando mientras los 'pobres' empeoraban su situación. La lucha contra la corrupción se transforma así en lucha de clases que apela al

resentimiento popular cultivado en las dos décadas anteriores. Quizás por ello, Chávez no ha hecho ningún intento serio de ganar terreno entre las clases medias profesionales, que le han reciprocado con una hostilidad militante y sostenida.

Finalmente, Chávez se diferencia desde el comienzo del régimen anterior en el carácter personalista y arbitrario de su gobierno. No es sólo que base su acción política en su gran capacidad de comunicación directa con sus bases, despreciando al partido como sujeto democrático con vida propia aparte de su líder, sino que esa misma forma de actuar la extiende al gobierno del Estado.

Los políticos del régimen anterior habían sostenido siempre un discurso institucional, aunque su práctica de gobierno atendiera más bien a los intereses de las redes relevantes de relaciones personales y clientelares. Chávez ni siquiera finge aprecio por la institucionalidad (incluyendo la que él mismo ha creado) o voluntad de hacerla avanzar. Su palabra, a menudo histriónica y arbitraria, decide con o contra la ley, tanto da. Exige a legisladores y jueces que le den los instrumentos para realizar su voluntad, y si no lo hacen suficientemente de prisa, procede igualmente y aparta o reemplaza a quienes pretenden sostener algún grado de formalidad institucional. De una manera que recuerda a Mussolini, o a Perón y Evita en uno, no considera que su legitimidad dependa de las instituciones, sino que la recibe de la comunicación directa con las masas populares.

¿Socialismo a la cubana?

Por último, hay un número de elementos que constituyen el núcleo del proyecto político chavista pero no se encuentran ni en el proyecto populista anterior ni en el diagnóstico popular sobre la crisis de ese proyecto. Sobre ellos, Chávez mantiene un pulso con el sentir venezolano, mientras trata de usar su poder y su capacidad comunicativa para hacerlos pasar, con grandes resistencias sociales.

Estos elementos son, curiosamente, tomados de Cuba. Esto parece una opción personal de Chávez, compartida sinceramente sólo por algunos de sus seguidores, y rechazada por la opinión pública mayoritaria tal como se expresa en las encuestas. Se trata fundamentalmente de (i) una presidencia autoritaria vitalicia, (ii) un socialismo totalitario con una economía altamente estatalizada, (iii) un proyecto de expansión revolucionaria continental, y (iv) el antiamericanismo consecuente. Nos detendremos aquí en los dos primeros, que son los de mayores repercusiones internas.

La presidencia autoritaria de por vida es posiblemente el objetivo central de Chávez, ferviente admirador de Fidel Castro, a quien visita con frecuencia. Es

también el que va más avanzado, por una serie de reformas legales y de maniobras ejecutivas que han limitado radicalmente la libertad de prensa, eliminado toda autonomía del poder judicial, y casi desarticulado la posibilidad de mantener elecciones libres y transparentes. Cuando el chavismo ha perdido gobernaciones de Estado o alcaldías importantes (en este momento son de oposición los gobernadores de casi todos los estados de mayor población, que son también los más urbanizados), ha respondido cortando los fondos a las correspondientes gobernaciones y modificando la ley para quitarles competencias, de manera de hacerlas ingobernables o impotentes. Esto se complementa con la actuación de bandas paramilitares y turbas organizadas por el mismo gobierno, dedicadas a amedrentar a los opositores al mejor estilo de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos o los *Fascii di Combattimento* mussolinianos.

La comparación con el fascismo italiano no es ociosa, porque el socialismo totalitario que Hugo Chávez promueve se asemeja hasta ahora más a él que al comunismo soviético. El modelo económico final del proyecto chavista no está claro, probablemente tampoco para sus fautores. Cuesta trabajo creer que se pretenda una economía totalmente estatalizada como la cubana, cuyo fracaso económico es tan obvio que le cuesta a Venezuela unos 10.000 millones de dólares anuales para que no recaiga en otro 'periodo especial'. Cuesta trabajo creerlo, pero una serie consistente de mensajes anti-consumistas enviados por Chávez y sus ministros más ideologizados, sugiere que se pueda estar preparando a la población para el paso a un sistema donde no habrá mucho que consumir. Un primer movimiento para la introducción de cartillas de racionamiento ha sido anunciado en septiembre de 2010.

Probablemente el chavismo termine en un modelo mixto con un propósito último político: el de impedir que nadie pueda ganarse la vida desahogadamente en Venezuela si no es contribuyendo a sostener a Chávez en el poder. Con ese propósito aparente, se han estatalizado empresas básicas para la economía que marchaban perfectamente bien (con la correspondiente caída del producto industrial), se ha permitido la invasión masiva de fincas y predios rurales (con el correspondiente derrumbe de la producción agropecuaria, cercano al 50% en productos clave como el arroz, el azúcar o la carne), y se han confiscado fincas y empresas pertenecientes a personas que se oponían al gobierno, o al menos no acataban sus órdenes. Los poderes legislativo y judicial han sido utilizados para 'lavar' las ilegalidades en que a menudo ha incurrido el Ejecutivo en estas operaciones.

Todo esto se ha hecho en nombre del socialismo, de cuyas bondades humanistas el presidente no se cansa de hablar. Sin embargo, los intentos

episódicos de hacer funcionar cooperativas, comunas y otras formas de economía autogestionaria han fracasado sonoramente. Como ocurría con el sector empresarial del régimen anterior, el socialista venezolano entiende a su cooperativa como un medio para recibir una parte mayor de la renta petrolera, de manera que el beneficio no proviene de la colocación de sus productos sino de los subsidios públicos que recibe. Y cuando deja de recibirlos, la cooperativa desaparece, y los cooperativistas se trasladan a dondequiera que la renta petrolera esté siendo repartida en el momento.

Quizás por ello, junto con la estatización de las grandes compañías, el chavismo ha propiciado en torno a sí la aparición de una nueva clase empresarial privada (la 'boli-burguesía', que llaman los opositores), la cual deriva sus beneficios de las innumerables oportunidades de negocio que ofrecen la cercanía al poder del Estado y las distorsiones de una economía hiperregulada. Esta clase, no muy numerosa pero de muy rápido enriquecimiento, debe constituir un nuevo poder económico oligopólico que respalde explícitamente al régimen. Si al final cae también bajo el impulso estatizador de Chávez, se tendrá quizás un caso único de paso al comunismo a través del fascismo.

Comunicación política y legitimidad

Las tres escenas con que comenzamos el artículo muestran los exóticos modos comunicacionales con que los diversos componentes del proyecto político chavista se presentan: Chávez expropia edificios dando un paseo; Chávez ataca al cardenal y manda instrucciones al Papa; Chávez conversa con Bolívar y llama almas podridas a los adversarios de su proyecto político.

Esta manera histriónica, personalista y arbitraria de gobernar, es acompañada por mensajes explicativos que enuncian muchas convicciones profundas de los venezolanos menos tocados por la modernización, quienes pueden así identificar en Chávez a uno de ellos que ha llegado al poder. Ese hombre fuerte combate a los enemigos externos e internos del pueblo, culpables de los males de éste, y realiza una promesa verosímil de distribuir entre los pobres los recursos del petróleo. Se trata de mensajes consoladores: los males están afuera del pueblo; son otros quienes deben cambiar, no nosotros. Tenemos un padre poderoso y enérgico que nos habla (eventualmente también nos canta) en un lenguaje de palabras y gestos que podemos entender. No sabemos adónde nos lleva, pero es reconfortante saber que quiere cuidar de nosotros. Si fracasa en ello, debe de ser porque los malos (los corruptos, los ricos, los pitiyanquis) interfieren con 'mano peluda' en tan nobles propósitos.

Sobre bases así, Chávez se ha construido una base sólida de legitimidad política que incluye aproximadamente a un tercio de la población, el menos

modernizado. Otro tercio, la parte más moderna de la sociedad, se le opone de manera igualmente sólida y consistente. El tercer tercio ve la fiesta según le va en ella en cada momento, lo que fuerza a Chávez a realizar grandes distribuciones de renta petrolera antes de cada votación. Si por una razón u otra el reparto falla, puede perder la votación (como ocurrió con el referéndum constitucional de 2007, y ha ocurrido en varias otras elecciones regionales y locales).

Creemos que esto explica en buena medida la sostenibilidad política del ‘fenómeno Chávez’ en un país que había emprendido seriamente el camino a la modernidad cuando él llegó al poder, pero no lo había culminado. Otro asunto, quizás más importante, es el impacto que esta larga presidencia (casi doce años ya) tenga a largo sobre las posibilidades de Venezuela de realizar su proyecto secular de modernización. De ello nos ocupamos en el siguiente epígrafe.

Balance: resultados y contradicciones internas

La modernización como núcleo del proyecto nacional venezolano ha permanecido desde los orígenes del país a través de los diversos avatares de los siglos XIX y XX, y sigue constituyendo la principal aspiración colectiva de la sociedad venezolana hasta hoy. Por ella debe medirse en primera instancia el éxito o fracaso de cualquier proyecto político.

La modernización política sin duda ha retrocedido en Venezuela durante la última década. Chávez ha retomado temas del siglo XIX venezolano, como el personalismo y el militarismo, para erigirse en caudillo que se comunica directamente con las masas, sin necesidad de mediaciones político-institucionales. Sobre esa base, ha venido erosionando o desactivando algunos de los elementos de constitución democrática ya ganados en la cultura pública (como el mecanismo electoral, la descentralización administrativa, o las libertades políticas), y ha agudizado problemas severos que se venían arrastrando de atrás (como la limitada, ahora inexistente, separación de poderes, o la escasa autonomía de las organizaciones sociales respecto del Estado). Esta es, sin duda, una línea que va a seguir desarrollando, puesto que su propósito incluye la permanencia indefinida en el poder.

En ese terreno el proyecto chavista contradice el arraigado aprecio popular por la democracia y las libertades públicas, y el rechazo a los regímenes no representativos. Aunque su idea quizás sea otra más metafísica, como la escena con los restos de Bolívar sugiere, la legitimidad de Chávez depende de llegar y mantenerse en el poder por elecciones libres, lo que consiguió en

primera instancia porque la mayoría no se sentía representada en los antiguos partidos populistas. Cada medida con que cierra el espectro democrático en realización de su programa socialista, recibe rechazo mayoritario incluso entre sus votantes.

Resulta también internamente contradictorio que hable de introducir cierta disciplina socialista, la cual constituye una forma totalitaria de institucionalización, al mismo tiempo que gobierna de hecho con enorme indisciplina respecto a sus propias instituciones, de manera patentemente personalista y arbitraria. El resultado de la desinstitucionalización, evidente para cualquiera que haya conocido a Venezuela antes y ahora, es un considerable incremento del desorden social.

Por otra parte, el Estado está siendo duplicado en vez de reformado para inducir la modernización social en la Venezuela petrolera. Está además absorbiendo empresas y creando rígidos mecanismos de control de la economía privada, con efectos paralizantes, mientras desmonta los nunca muy eficaces mecanismos de control económico del sector público.

Todo ello sería ya problemático si el Estado de derecho venezolano funcionara razonablemente bien. Pero, como hemos repetido, en Venezuela hay una arraigada tradición de gestión pública por relaciones personales y clientelares que predominan sobre las relaciones legales. Al agrandar el Estado sin reformarlo, Chávez extiende los males de la cultura pública que destruyeron al régimen anterior, dando más poder a viejas y nuevas redes clientelares para apropiarse porciones cada vez mayores de la renta petrolera. Una nueva colonización del Estado por esas redes está en marcha.

Venezuela se está encontrando así con un Estado más grande y con menos regularidad institucional que el ya sobredimensionado y disfuncional que arrastraba antes de Chávez. Ello introduce costes económicos innecesarios, peligros obvios de corrupción y grandes ineficiencias estructurales, al tiempo que distorsiona todas las relaciones en la vida pública y obstaculiza cualquier intento de hacer el país más justo. Hace cincuenta años que no era en Venezuela tan necesario ser identificado con la facción en el poder para entablar relaciones positivas con el Estado (tan pequeñas como obtener un empleo o una licencia empresarial, o tan grandes como ver los propios intereses legítimos considerados en el diseño de las políticas públicas o las leyes).

Junto con la estatalización sobre un Estado con considerables disfuncionalidades, la destrucción del tejido agropecuario e industrial privado del país también conspira contra la modernización económica. Venezuela está quedando convertida en una economía de servicios que importa masivamente

los bienes que consume, alimentos incluidos, usando recursos del monoproducción petrolero, el cual hace más del 90% de las exportaciones.

Los malos resultados económicos de raíz estructural tienen consecuencias importantes para un proyecto político que depende de satisfacer aspiraciones crecientes de consumo de bienes y servicios de las mayorías populares. Esta es otra contradicción importante: si se aniquila la economía privada, cae la base imponible y el Estado se empobrece. Pero un Estado pobre no puede hacer grandes repartos.

Queda siempre, sin embargo, el recurso al petróleo. Si los precios internacionales suben suficientemente, ello puede quizás compensar desde el punto de vista del ingreso fiscal la degradación del resto de la economía. Lo que a su vez se contradice con el discurso nacionalista y socialista del régimen, porque al fin el petróleo hay que venderlo a los países industriales, y estos resultan, no por casualidad, ser todas economías capitalistas.

Como los precios del petróleo no sólo no suben lo suficientemente deprisa, sino que siguen siendo volátiles, el gobierno venezolano, repitiendo una política que dio resultados catastróficos en el pasado, responde a las limitaciones de la financiación interna con endeudamiento exterior masivo a medio plazo, a pagar con petróleo que será extraído en el futuro (20.000 millones de dólares en un solo acuerdo con China, en abril de 2010). Cualquier programa posterior de modernización económica heredará esta gravosa hipoteca.

La modernización social, por su parte, se ve afectada por el hecho de que, en lugar de intentar sanar con un nuevo pacto entre clases el resentimiento engendrado en los veinte años anteriores, Chávez lo ha convertido en una política de confrontación social, tematizando y ahondando la brecha entre clases para intentar consolidarse en el monopolio de la representación de las mayorías populares y marginales. Aunque es obviamente bueno que esas mayorías tengan genuinos representantes políticos, el país no puede modernizarse en medio de un conflicto sostenido entre el 60% de la población que todavía no ha desarrollado plenamente capacidades productivas modernas, y el 40% que sí lo ha hecho. Ese ahondamiento de la brecha social para convertirla en brecha política genera problemas de acción colectiva que permanecerán largo tiempo después de Chávez.

Una de las contradicciones más flagrantes del proyecto político chavista se encuentra en la concepción que ha heredado y expandido de la modernización social. El populismo anterior acabó haciéndola equivalente a la provisión gratuita de servicios públicos de baja calidad y a la expansión de la capacidad de compra por parte de la población de productos en buena parte importados,

utilizando para todo ello la renta petrolera. El resultado es una cultura económica que no ha construido nunca el vínculo producción-consumo, en que el protagonista de la producción es uno mismo, sino que tiene en su lugar uno distribución-consumo, en que el protagonista de la distribución es el Estado.

Según mencionamos arriba, Chávez ha venido utilizando esta cultura económica para ganar elecciones con considerables distribuciones de renta (y promesas de que habrá más) en los meses anteriores a cada votación. Dado que la base que le es personalmente leal no resulta suficiente para ganar elecciones, y la base ideologizada a favor de su proyecto socialista es mucho menor, el régimen ha necesitado continuar la vieja tradición populista de comprar los votos que le faltaban.

Pero el reparto de renta para el consumo fomenta obviamente el consumismo, que constituye para la mayor parte de la población venezolana la señal más clara de éxito personal y reconocimiento social. No va pues en la dirección de construir el hombre nuevo socialista, movido por ideales, austero y solidario. Tampoco ayuda a ello la élite del régimen, líder máximo incluido, que exhibe su nuevo estatus económico con entusiasmo de nuevos ricos. Así pues, hay aquí una contradicción difícil de superar: el chavismo gana las elecciones con que quiere llevar a la población al socialismo, repartiendo los medios para que se sumerja aún más en el perverso consumo capitalista.

Muy probablemente, cuando el venezolano popular oye a Chávez predicar el socialismo, lo que interpreta es 'el Estado me va a dar más', cosa que no le parece mal. Si llegara a intentar establecer un socialismo de verdad, el proyecto político chavista duraría poco, o bien necesitaría dosis masivas de represión para imponerse. Al fin, el pueblo venezolano se introdujo en la modernidad por el capitalismo consumista: sesenta años ya, incluidos los de Chávez. Es difícil imaginar un nivel de indoctrinación capaz de cambiar las aspiraciones populares generadas por la inmersión en la sociedad de consumo. Constituiría una improbable novedad histórica. Como, independientemente de las peculiaridades del líder, no se observan tendencias suicidas en la élite chavista, nuestro pronóstico es que el socialismo no se intentará seriamente en Venezuela, sino que el régimen tratará de estabilizarse como un fascismo, quizás inspirado en China, aunque con petróleo y mineral en lugar de industria.

Finalmente, las políticas de disolución institucional y de confrontación de clases, unidas al fracaso de las políticas educativas en abrir horizontes para la integración productiva de los jóvenes, han resultado en un considerable incremento de la anomia social. Su indicador más claro es la violencia delictiva: en 1998, último año del régimen populista de partidos, hubo en Venezuela 4.550 asesinatos; en 2009, se contaron 16.047 (cifras del Observatorio

Venezolano de la Violencia), lo que convierte a Venezuela en el país con más homicidios por cien mil habitantes de los comparables de América Latina. Nueve de cada diez asesinatos quedan impunes.

El balance general del proceso chavista desde el punto de vista de la modernización de Venezuela es, pues, nítidamente negativo. No sólo esa modernización no está ocurriendo sino que se observan signos claros de regresión en lo político y lo económico, y un remachamiento de convicciones populares disfuncionales que consiguieron derrotar en el pasado proyectos modernizadores mejor planteados que éste.

El proceso chavista está siendo útil, sin embargo, para recordar a los grupos políticos y sociales ahora en la oposición, en particular a empresarios y profesionales, la necesidad de un pacto social modernizador efectivo con las clases populares y marginales, si quieren tener alguna esperanza de recuperar el poder social que una vez tuvieron. La interlocución con las aspiraciones populares ha recuperado su carácter de asunto imprescindible para todo proyecto de modernización de Venezuela. En que los venezolanos ya modernos aprendan esa lección, y renuncien tanto a tecnocracias incomprensibles por las mayorías como a la explotación de las insuficiencias culturales de sus conciudadanos, se juega que Venezuela encuentre por fin su camino, o se estanque en aguas cenagosas por largo tiempo, con Chávez y después de Chávez.